

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 10° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-6594-2018
CARATULADO : HENSELEIT/ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA

Santiago, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve

Vistos.

Comparece doña Karen Henselleit Viscari , secretaria ejecutiva , con domicilio en pasaje Trihue N° 723, comuna de Ñuñoa quien deduce demanda de indemnización de perjuicios en contra de la I. Municipalidad de Providencia, representada legalmente por su Alcaldesa, doña Evelyn Mathei Fournet, funcionaria pública ambas con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia 963 Edificio Consistorial, comuna de Providencia.

En folio 7, la demandada contesta la demanda.

En folio 12, la demandante evacua la réplica.

En folio 14, la demandada evacua la dúplica.

En folio 15, se llama a las partes a audiencia de conciliación, notificado en folio 18 y se lleva a cabo en audiencia de folio 19, con la asistencia de la parte demandante y en rebeldía de la parte demandada por lo que no es posible arribar a conciliación.

A folio 21, se recibe la causa a prueba.

A folio 44, encontrándose la causa en estado se cita a las partes a oír Sentencia

CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que Karen Henselleit Viscari, interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra de la Ilustre Municipalidad de Providencia, representada legalmente por su Alcaldesa, doña Evelyn Mathei Fournet, todos ya individualizados por los motivos que se pasan a exponer.

Señala que con fecha 7 de septiembre de 2017, cerca de las 19.00 horas aproximadamente, cuando transitaba por calle Ricardo Lyon a la altura de Avenida Providencia, sufrió una caída producto de la vereda en mal estado que está en el sector cercano a la cuneta, por el costado del quiosco.

Relata que luego de la caída se dirigió a Urgencia del Hospital Salvador, don fue atendida por medico de turno en traumatología, donde se le prestan los primeros auxilios correspondientes.



Explica que como consecuencia de la caída sufrió diversas contusiones en su brazo izquierdo y pie izquierdo quedando ambos hinchados y amoratados además de sufrir una fractura de la epífisis Inferior del Radio, en la muñeca izquierda. Fue enyesada en su brazo izquierdo quedando con control para el día 23 de octubre de 2017, por lo que excediendo esa fecha las 4 semanas indicadas para control concurre a la Mutual de seguridad en donde se reafirma el diagnóstico y se le indica kinesioterapia motora de extremidad superior izquierda, realizándose dicho tratamiento en el CDT del Hospital Sotero del Río.

Expone que existe en la vereda donde sufrió la caída un desnivel y rotura y que no contaba con señalización que advirtiera a los transeúntes de su existencia.

En cuanto al derecho alega que los hechos relatados, dan cuenta de una omisión en que incurre la Municipalidad que importa falta de servicio en el cuidado de las calles o avenidas públicas, denominados bienes nacionales de uso público y a los que se refiere el artículo 589 inciso 2 del Código Civil.

Expone que según la Constitución Política de la República y los artículos 4 y 42 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, los órganos del Estado deben responder por los daños que se ocasionen en el ejercicio de su actividad.

Hace además mención a lo presupuestado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su artículo 141 inciso primero en cuanto a la responsabilidad de los Municipios por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio.

Adiciona a lo anterior que la ley 19.495 de marzo de 1997 que modifica la ley de Tránsito, estableció en su artículo 174 m que la municipalidad respectiva o el fisco serán responsables civilmente de los daños que causaren con ocasión de un accidente que sea consecuencia del mal estado de las vías públicas o de su falta o inadecuada señalización.

Añade que según la doctrina, a los municipios les corresponde las tareas tendientes a satisfacer las necesidades permanentes, en forma regular y continua, conforme a la propia definición de municipio contenida en el art. 1 de la ley N° 18.695 y que la labor inspectiva no cesa en modo alguno, por la circunstancia que las vías deban ser reparadas y conservadas por el SERVIU; de tal modo que si el municipio incumple con su obligación de advertir y señalar cuales son los peligros que pueden enfrentar el usuario de calzadas y aceras, incurre en falta de servicio y está obligada a indemnizar los perjuicios que esta acarree.

Indica que existiendo relación de causalidad entre las faltas de servicio imputada a la municipalidad demandada y las lesiones físicas y morales sufridas por la demandante es que demanda por los perjuicios sufridos en su aspecto moral, para



lograr en la medida de lo posible, una satisfacción en el dolor o aflicción espiritual causada e la persona que ha sufrido los daños derivados de la conducta negligente y descuidada de la demandada.

Funda el daño moral derivado de las lesiones físicas sufridas pretium doloris y perjuicio de agrado, derivado del dolor, pesar, incertidumbre y enormes molestias experimentadas que deben ser indemnizadas.

Puntualiza en que la doctrina y jurisprudencia han señalado que, el juez debe tener en cuenta tanto la naturaleza del hecho culpable y del derecho agraviado, como las facultades del autor, pero muy especialmente, las condiciones y situación personal del ofendido y la manera como ha sido afectado en sus actividades normales, que este tipo de daño es indemnizable de acuerdo con nuestra legislación, como lo demuestran, entre otras disposiciones, el art. 2.314 del Código Civil 2.329, 2.331 del mismo cuerpo legal; y a igual conclusión se llega examinando otros textos legales como los arts. 215 y 370 del Código Penal. Que los artículos citados señalan- el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización y, por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por esta.

En el mismo sentido, refiere que la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia ha señalado también que, para que el principio de la reparación plena se cumpla efectivamente, es necesario tener en cuenta la disminución del poder adquisitivo de la moneda operada en el tiempo transcurrido entre el daño producido y la fecha de pago, que será aquella en que la víctima podrá disponer de la indemnización, lo ordenado a pagar por indemnización esta se deberá reajustar en la variación que experimente el I.P.C entre la época del suceso y la del pago efectivo; y en cuanto a los intereses que corresponden a la pérdida del goce de la parte del patrimonio menoscabado por el daño, y en su aspecto moral, también han de comprenderse como rubro de la reparación para que esta sea cabal, debiendo fijarse como tales en la especie los intereses corrientes para operaciones no reajustables, calculado dentro de los mismos límites temporales señalados para la reajustabilidad.

Conforme lo que expone, estima como daño moral sufrido en su persona en la suma de \$50.000.000.- (cincuenta millones de pesos);

Indica que su fundamentación legal señalada es, sin perjuicio, de las diferentes normas de carácter constitucional que dan argumento para las reparaciones del daño moral, como son el art. 19 N° 1 (El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas); 19 N° 4 (El respecto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia). De manera que cualquier



atentado a la persona que menoscabe o cause detrimento a estos derechos de la personalidad, deben ser indemnizados, en cumplimiento del mandato constitucional de protección a los mismos.

Por lo anterior solicita se tenga por interpuesta demanda ordinaria de indemnización de perjuicios derivadas de responsabilidad extracontractual, por falta de servicio, en contra de la I. Municipalidad de Providencia, representada por la Sra. Alcaldesa, dona Evelyn Mathei Fournet, ya individualizada , someterla a tramitación y, en definitiva, declarar que la demandada debe pagar, a la demandante la suma de \$50.000.000.- (cincuenta millones de pesos) por concepto de daño moral, en su calidad de víctima, o a la suma que el Tribunal estime fijar, conforme a criterios de equidad; mas reajustes e intereses contados desde que la sentencia que se dicte en autos cause ejecutoria y hasta la fecha del pago efectivo de las indemnizaciones demandadas, con costas.

SEGUNDO: Que comparece don Gonzalo Hernán Vallejo Geiger, en representación de la Ilustre Municipalidad de Providencia, contestando la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual deducida en autos, solicitando se rechace íntegramente, con costas, por los antecedentes de hecho y de derecho que se pasan a exponer.

Alega en primer término que la demandante no describe las circunstancias en que se produjo la caída y que solo refiere que posteriormente al accidente relatado, fue al lugar del accidente y verificó que existía en dicha vereda un desnivel y rotura de la misma, pero no precisa cual es el origen de los mismos, ni tampoco indica cual sería la fecha en que habría concurrido posteriormente, la que es absolutamente indeterminada;

Estima que los hechos relatados por la actora serían imprecisos, no darían cuenta del desperfecto existente en la misma vereda, ya que la actora reconoce expresamente que solo después del 7 de Septiembre y en una fecha indeterminada habría concurrido al mismo lugar, para verificar que el supuesto mal estado de la vereda consistiría en un desnivel y rotura de la misma;

Alega que ni siquiera conforme a los propios dichos de la actora, se puede determinar si dicho desnivel y rotura existía al momento en que habría sufrido la caída por ella referida, y que se presenta como base de la supuesta falta de servicio imputada a la Municipalidad, y consecuentemente, no existe relación de causalidad para fundamentar el pago de los cincuenta millones de pesos \$50.000.000, correspondiente a la indemnización de perjuicios por daño moral alegada por la demandada;



Controvierte el hecho que debido a los hechos relatados por la actora, respecto del supuesto accidente ocurrido el día 7 de Septiembre del año 2017, esta haya sufrido daños y perjuicios por daño moral, y que estos alcancen a la suma demandada de cincuenta millones de pesos \$50.000.000 o cualquier otro monto, y que estos sean susceptibles de ser indemnizados por la Municipalidad, además lo relativo a la existencia, origen, naturaleza, monto y entidad de los mismos.

Asimismo controvierte el supuesto mal estado de la vía, así como que el supuesto accidente fuera una consecuencia directa de esa circunstancia, y la existencia de una obligación de señalizar, considerando que no se señala que al momento del accidente existiría el desperfecto en que basa la demandante su solicitud de indemnización, ni si la entidad o envergadura de la misma obligaba a esta Municipalidad a señalizar el supuesto desperfecto;

En otro orden de ideas, sostiene que, aunque efectivamente el inciso 5 del artículo 169 de la Ley N° 18.290, hace civilmente responsable a las Municipalidades de los daños que sean consecuencia del mal estado de las vías o de su falta o inadecuada señalización, en el caso de autos, para que dicha responsabilidad se haga efectiva, es necesario que la demandante acredite no solo que la demandada tenía la obligación de señalizar dicho mal estado de la vía pública, sino que también debe demostrar que entre la falta de servicio que imputa a esta responsabilidad, el hecho dañoso y los perjuicios sufridos, existe la relación causal necesaria para que se haga responsable a esta Municipalidad;

Añade que la actora debe acreditar en forma copulativa, los supuestos que consigna para hacer efectiva la responsabilidad de la municipalidad demandada. La existencia de una falta de servicio municipal, ello en los términos señalados en el Artículo 152 de la Ley N° 18.695, y que en el caso de autos se liga con la obligación a que se refiere el Artículo 169 de la Ley de Tránsito, y; que exista una relación de causalidad directa entre la falta de servicio atribuida y acreditada, los hechos constitutivos del cuasidelito civil y la existencia de un daño indemnizable, como también su monto.

Argumenta que los Tribunales de Justicia se han uniformado en su Jurisprudencia, al señalar que para que haya falta de servicio, la envergadura de la falla en la vereda o en el pavimento debe ser tal, que resulte exigible de la Municipalidad la conducta de señalizar el desperfecto de que se trate, lo que se traduce en que debe acreditarse por la actora, no sólo la existencia del supuesto desnivel, sino que también, que la envergadura de la misma hacía exigible para esta Municipalidad, el cumplimiento de la obligación de señalizar dicho desperfecto;



En cuanto a la indemnización solicitada sostiene que excede toda base de justicia, además de no cumplir con ninguno de los requisitos para que se acceda judicialmente al pago de dicho concepto; Considerando la naturaleza de las lesiones que la actora expone haber sufrido, la indemnización del daño moral por una cantidad de cincuenta millones de pesos, \$50.000.000, corresponde a una suma excesiva, sin fundamento de justicia, y no se condice ni con el perjuicio sufrido, ni con variación en las condiciones de vida que habría sufrido la actora, sin que haya ningún antecedente expuesto en la demanda, que justifique el pago de la suma antes detallada;

Solicita en definitiva que se rechace la demanda y se condene en forma ejemplar a la demandante al pago de las costas personales y procesales, en subsidio, solicita que en caso de acceder a la demanda de autos, se rebajen prudencialmente los montos demandados por la actora en lo correspondiente la indemnización del daño moral, por aquellos que se acrediten en el proceso y se ajusten a Derecho, y conforme el Tribunal lo estime de justicia, rechazando la condena en costas por su esta parte motivo plausible para litigar.

TERCERO: Que al evacuar la réplica, la parte demandante reitera los antecedentes de hecho y de derecho en que funda su demanda.

CUARTO: Que a su vez la demandada al evacuar el trámite de dúplica también los antecedentes de hecho y de derecho esgrimidos en su contestación, precisando que la actora ha señalado en su réplica que reitera los antecedentes ya expuestos al deducir la demanda de indemnización de perjuicios que motivó esta causa, sin que haya controvertido ninguno de los siguientes antecedentes expuestos por la Municipalidad al contestar la demanda.

Concluye que, los hechos relatados por la actora en su demanda, sin que hayan sido precisados o complementados en su réplica, son imprecisos, no dan cuenta del desperfecto existente en la misma vereda conforme al cual se alega la supuesta falta de servicio, ya que la actora reconoce expresamente que solo después del 7 de septiembre y en una fecha indeterminada habría concurrido al mismo lugar, para verificar que el supuesto mal estado de la vereda consistiría en un desnivel y rotura de la misma. Cita el fallo emitido por la Excelentísima Corte Suprema con fecha 12 de Septiembre del año 2013, al acoger el recurso de Casación en el Fondo deducido por la I. Municipalidad de La Reina en la causa tramitada con el Número de Ingreso N° 4.176-2012, caratulada “NEELY CARLOS CON I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA”, al referirse a la falta de servicio y la relación de causalidad como requisitos necesarios para determinar si existe responsabilidad municipal en daños provenientes de accidentes ocurridos en la vía pública; Añade que el análisis que efectúa dicha sentencia en los considerandos 7º,



8º, 9º, 11º y 12º del mismo fallo, llevó a rechazar la demanda, acogiendo el recurso de casación en el fondo deducido por la I. Municipalidad de La Reina, ya que es siempre necesario e insustituible acreditar la relación causal entre el daño, la falta de servicio y los perjuicios, de manera que se establezca el factor de atribución de responsabilidad que las normas legales aplicables exigen para la Municipalidad.

Con respecto a la obligación de señalar el desperfecto a que se refiere la demandante, y que en su concepto pesaría sobre esta Municipalidad, también es necesario puntualizar que la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, se ha uniformado en el sentido que para que exista dicha obligación, la falla de que se trate debe tener una entidad significativa para hacer surgir la obligación de señalar dicho desperfecto, cita, lo resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en la Sentencia dictada con fecha 09 de Agosto del año 2010, en causa correspondiente al Ingreso Rol N° 6243-2009, sobre Apelación de Sentencia Definitiva en causa sobre Indemnización de Perjuicios por Falta de Servicio, caratulada “LLAO ESTEVEZ MARIA CON I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA”, y que rechazo la apelación interpuesta por la demandante;

Sintetiza en que, a su juicio, la Municipalidad de Providencia no ha incurrido en ninguna conducta que pueda ser estimada contraria a derecho, negligente o culposa, mientras que los perjuicios supuestamente sufridos por la actora, no son responsabilidad esta Municipalidad, al no existir una falta de servicio de la demandada, considerando que por la exigua envergadura del desnivel de la acera referida, no existía una obligación de señalar el supuesto desperfecto al que se refiere la actora en su demanda.

QUINTO: Que en la especie resulta controvertido el acaecimiento del accidente reclamado por la demandante, si el mismo aconteció a consecuencia del mal estado de la acera por donde transitaba y/o de su falta o inadecuada señalización y si con ocasión del mismo se produjeron los perjuicios reclamados por la actora.

SEXTO: Que con el fin de acreditar sus dichos la parte demandante acompañó los siguientes documentos:

1. Certificado de salud de fecha 8 de enero de 2018, firmado por medico Gustavo Barraza Ortega, que señala que la señora Miranda Vicari Gecker es atendida en CECOSF Villa Olímpica y pertenece a pacientes con dependencia severa.
2. 8 fotografías



3. Dato de atención de urgencia, Hospital Salvador, de fecha 7 de septiembre de 2017, paciente Karen Henseleit Vicari, hipótesis diagnóstica: fractura de epífisis Inferior del radio.
4. Documento con sello de Mutual de Seguridad, firma ilegible sin timbre que indica Kinesiterapia
5. Documento con sello de Complejo Asistencial Dr Sotero del Río con timbre y firma, pero ilegible.

Séptimo: Que la actora para fundamentar sus aseveraciones presentó a declarar a los siguientes testigos:

1. Camila Espinosa Sepúlveda, quien, previamente juramentada y sin tacha que acompañaba a la demandante ese día, (sic) sin indicar fecha, y que habría escuchado como se cayó. Que la actora cayó fuerte con su brazo izquierdo. Que estuvo con yeso durante dos meses aproximadamente y que a la fecha no ha podido recuperar la movilidad. Añade que la demandante tiene a su mamá postrada en su casa y que por el accidente tuvo complicaciones para asistir a su madre. Añade que el accidente además le complicó en la mantención de su casa y de sus animales, que la actora trabaja en corretaje y que por el accidente y el yeso no pudo trabajar. Refiere que la actora sufrió menoscabo moral porque además de su limitación su marido tuvo que de malas ganas atender a su madre y sus obligaciones (sic) lo que ocasionó problemas es su matrimonio. Cuantifica los perjuicios en cincuenta millones de pesos
2. Marcela Farías Rivas, quien debidamente juramentada y sin tacha declara que iba pasando por ese lugar (sic) rumbo a su casa y ve a la demandante caer porque tropezó con la vereda que estaba levantada y se azota el brazo izquierdo al caer. Que la sesión la perjudicó en su trabajo y en su casa además de la complicación se du mama postrada (sic).

OCTAVO: Que por su parte la demandada no rindió prueba alguna limitándose a acompañar en presentación de folio 32, de fecha 5 de abril de 2018, copia de textos legales y sentencias de diferentes Tribunales.

NOVENO: Que el artículo 1°, inciso 2° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone que las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas. En este contexto y para el cumplimiento de sus funciones el artículo 5 letra c) de la citada Ley Orgánica Constitucional, otorga a las municipalidades la atribución de administrar los bienes municipales y nacionales



de uso público existentes en la comuna, salvo que en atención a su naturaleza o fines y de conformidad a la ley, la administración de estos últimos corresponda a otros órganos de la Administración del Estado.

DÉCIMO: Que en concordancia con lo anterior cabe indicar que del artículo 589 del Código Civil, se desprende que constituyen bienes nacionales de uso público, las calles, las plazas y caminos.

En este sentido y con el objeto de precisar el vocablo “calle” resulta ilustrativo tener presente las definiciones contempladas en el artículo 2° de la ya citada ley de tránsito, en el que se indica que por “Vía”, debe entenderse calle o camino u otro lugar destinado al tránsito; por “Avenida o Calle”, la vía urbana destinada a la circulación de los peatones, de los vehículos y de los animales; y por último el término “Acera”, comprende la parte de una vía destinada al uso de peatones.

UNDÉCIMO: Que por su parte el inciso 5° del artículo 174 refiere que la Municipalidad respectiva o el fisco, en su caso, serán civilmente responsables por los daños que se causen con ocasión de un accidente que sea consecuencia del mal estado de las vías públicas o de su falta o inadecuada señalización. Concordante con esta disposición el artículo 142 de la Ley 18.695 dispone que las Municipalidades incurren en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá, principalmente, por falta de servicio.

DUODÉCIMO: Que del marco normativo enunciado en los considerandos anteriores, aparece de manifiesto que las municipalidades tienen la obligación legal de velar por el cuidado y conservación de las vías públicas, entre ellas las vías de tránsito peatonal, ubicadas dentro de su respectivo territorio jurisdiccional, y en caso de encontrarse éstas en mal estado, advertirles a los usuarios de las mismas, del riesgo que ello trae consigo mediante la instalación de señalizaciones adecuadas; de manera tal de mantenerlas en un estado de adecuado funcionamiento que no implique riesgos que pudieran concretizarse en accidentes que dañen a las personas y/o o sus bienes.

DÉCIMO TERCERO: Que de la probanza instrumental y testimonial rendida por la demandante, individualizada en los considerandos 7° y 8° de autos, se establece que efectivamente con fecha 7 de septiembre de 2018, éste en circunstancias que transitaba por la calle, tropezó en una vereda con baldosas, Esto por lo declarado por las testigos presenciales de la caída las que declaran que la demandante se habría caído, pero sin señalar que día y en qué lugar específico , en ningún parte del relato de las testigos , ni en ninguna otra prueba se puede obtener información tendiente a acreditar la fecha y el lugar exacto de la caída. Si bien conforme el documento de atención de urgencia del Hospital Salvador puede acercarse el convencimiento de esta juez a la fecha de ocurrencia del accidente, esto es, 7 de



septiembre de 2017, no existe en este juicio prueba que acredite en qué lugar ocurrió ni menos en que condiciones. Refiere una testigo, que estaban en la intersección de Lyon con Providencia y luego se acompañan fotografías simples sin fecha, que dan cuenta de letreros señalizando aquella intersección , posteriormente una foto de un quiosco donde se ve una falla en la vereda sin señalar la fecha en que esa fotografía fue tomada.

Queda asentado, especialmente con el único documento legible acompañado por la actora, que con ocasión de la caída sufrida, ésta padeció una fractura de la epífisis inferior del radio, quedando con yeso.

DÉCIMO CUARTO: Que la prueba rendida por el demandante no se logra asentar la infracción al deber legal que tiene la entidad municipal de repararlas o de, al menos, advertir al público de la existencia de dichas irregularidades con el objeto de precaver posibles accidentes.

DÉCIMO QUINTO: Que atendida la exigua prueba aportada para efectos de determinar la responsabilidad de la Ilustre Municipalidad de Providencia, por falta de servicio la demanda será desestimada y así se declarará en lo resolutive de la presente sentencia.

DÉCIMO SEXTO: Que a mayor abundamiento, en relación a los demás requisitos en relación a la existencia de los perjuicios reclamados por la demandante, y si entre estos daños y la referida falta de servicio existe una relación de causalidad que los vincule, estos tampoco resultan acreditados en autos

DÉCIMO SEPTIMO: Que en cuanto al daño moral alegado, éste puede ser entendido, tal como lo hace el profesor René Abeliuk Manasevich como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

En la especie, se alega el daño moral sufrido por la actora a consecuencia del accidente indicado.

DECIMO OCTAVO: Que a pesar de su naturaleza particular, el daño moral debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que este constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil, por tanto, aquel que intente beneficiarse de la concurrencia de la misma, tendrá la carga probatoria de demostrar su existencia. Así la indemnización del daño moral requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, el que deberá ser demostrado por los medios de prueba legalmente establecido.

VIGÉSIMO: Que en orden a acreditar su existencia y evaluación el demandante rindió prueba testimonial de sus testigos, una vecina y una persona que transitaba



por la calle al momento de la caída, la que no señala ni la fecha ni el lugar pero que se limitan a dar cuenta de lo relatado a ellas por la propia demandante.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que atendida la prueba rendida y analizada en el proceso esta sentenciadora estima que el daño moral alegado por la actora tampoco resulta acreditado con las pruebas rendidas

VIGESIMO SEGUNDO: Que el resto de la prueba rendida en nada modifica lo precedentemente razonado por corresponder a un certificado médico que hace mención a una persona de la que no se acredita, con certificado alguno, la relación de parentesco que pueda tener con la demandante y el resto de la documental resultó ilegible .

VIGÉSIMO TERCERO: Que no se condena en costas a la demandante por estimar que litigó con fundamento plausible conforme lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 5 letra c) de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, 174 y 195 de la Ley N°18.290, 1698 y 2314 y siguientes del Código Civil; y artículos 144, 170, 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se resuelve:

I. Se rechaza, por falta de prueba, la demanda deducida en lo principal de demanda de fecha 2 de marzo de 2018, en folio 1

II.- Se no condena a la demandante al pago de las costas de la causa

Regístrese y archívense en su oportunidad.

N° 6594-2018.

Pronunciada por Guinette López Insinilla, Juez Suplente.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veinticuatro de Julio de dos mil diecinueve**





Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>